

# Los acelerados cambios políticos en el Perú de estos días

*Romeo Grompone*



LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL en las elecciones presidenciales peruanas de 2006 llevó a la disputa por el poder a dos candidatos de orientación populista:<sup>1</sup> Alan García y Ollanta Humala. El populismo del primero se relaciona con las primeras expresiones de esta tendencia en América Latina, mientras que el del segundo tiene que ver, más bien, con cambios recientes en las sociedades latinoamericanas, en especial en las andinas. Estas elecciones nos dejan tres resultados importantes: el triunfo de Alan García sobre Humala con un margen menor al previsto; la derrota de la derecha política, no considerada en las interpretaciones de mayor influencia a principios de 2006; y la práctica desaparición, por lo menos en esta etapa, de una izquierda democrática.

Paradójicamente, Alan García tiene un privilegio que no tuvieron ni Haya de la Torre, salvo en sus últimos años de vida, ni el APRA como partido, durante su larga y densa historia: contar con la aceptación de sus enconados opositores, con la paradoja o la ironía de que García sigue siendo mirado

---

<sup>1</sup> El autor ha escrito recientemente un libro y diversos artículos sobre la coyuntura política. Ha tratado de evitar repetir argumentos anteriores, pero ocasionalmente tiene que recurrir a ellos.

con un descrédito y desconfianza que trabajosamente hubiera podido superar el líder histórico de su organización. Alan García obtiene la presidencia con aliados inesperados tanto en 1985 como en 2006. La primera vez lo apoyan con la idea de que el país tiene que afrontar un cambio inevitable; y la segunda, bajo el signo del temor al otro candidato y la expectativa de que haya cambiado en su orientación y en su estilo.

En 1985, Alan García llega al gobierno a causa del fracaso del segundo gobierno de Belaunde y de los temores que despertaba el posible ascenso de una izquierda política que progresivamente se iba adaptando al juego democrático y que comenzaba a aparecer como un contendor a tener en cuenta. Por su parte, la derecha política aparecía desgastada como alternativa. Ante el fracaso de Acción Popular, el Partido Popular Cristiano no podía funcionar como pieza de recambio, no solo por sus compromisos con la gestión del gobierno saliente, aislado socialmente, sino porque su radio de incidencia se encontraba afincado casi exclusivamente en los votos limeños. Por aquel entonces, las elites empresariales, a la vez que seguían prácticas mercantilistas buscando obtener ventajas de posiciones privilegiadas en su influencia con el Estado, todavía entendían que este podía ser promotor del desarrollo. Si a ello agregamos como elemento decisivo una consistente convocatoria social, se explica que el triunfo de Alan García tuviera un amplio apoyo del electorado e hiciera incluso que el entonces candidato de la izquierda, Alfonso Barrantes, desistiera de comprometerse en una segunda vuelta electoral, al no tener perspectivas reales de competir por el poder.

Más de veinte años después, Alan García es elegido en segunda vuelta con parte del apoyo de los grupos de orientación conservadora, particularmente de sus élites. Para ello tuvo que ocurrir la derrota de la candidata de Unidad Nacional, que hasta tres semanas previas a las elecciones de primera

vuelta aparecía como inesperada. Lourdes Flores Nano realizó un persistente esfuerzo por acercarse al conjunto de la población y por entender que, por lo menos en la promoción de políticas sociales y de empleo, correspondía desarrollar una línea más preocupada por los problemas de inclusión que lo que había supuesto su prédica tradicional. Por cierto, estas ideas y esta voluntad no estuvieron acompañadas de un equipo técnico y de asesores que siguieran su propuesta, de la que probablemente no estaban convencidos. Ello hacía que, aunque Flores tuviera una amplia cobertura mediática, recorriera el país, visitara mercados y zonas rurales, y estuviera rodeada de seguidores en algunas ocasiones, diera una impresión de aislamiento y soledad.

Alan García gana esta vez, y mucho más que en 1985, por la aceptación de lo inevitabilidad del cambio. Su triunfo se da por un escaso margen y con una adhesión, en muchos casos, probablemente menos entusiasta que la que tuviera su contendor. Parte del electorado temían la emergencia de lo que se consideraba un movimiento imprevisible, desestabilizador y eventualmente radical, que se asociaba a las nuevas organizaciones de la izquierda tumultuosa, contestataria e influyente que representaban Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Ellos aparecían como propiciadores de una situación de desborde, de probables enfrentamientos sociales y de una radical transformación en las líneas matrices de la política económica, que contrastaba con las opciones más moderadas que asumían, por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva en Brasil y de Ricardo Lagos y luego Michelle Bachelet en Chile. Probablemente, para los grupos conservadores quedaba como una aspiración que no podía cumplirse la emergencia de un liderazgo decidido de derecha como el Álvaro Uribe en Colombia.

Aparecer como el menor de los males decidió el temprano apoyo que se dio a Sánchez Cerro en perjuicio de Haya de la Torre en 1931 (Contreras y Cueto 2000). Ahora se elige a García con renuencia, a pesar de las señales de sus presuntos aprendizajes y de su empeñosa proyección como político más maduro, ajustado a los cambios y exigencias de la llamada globalización, en su peculiar manera de entenderla. De todas maneras, si nosotros tuviéramos que ordenar la situación política que estamos viviendo actualmente en el Perú y que se expresó en estas elecciones —evaluando el peso partido por partido, haciendo luego cálculos de correlaciones de fuerza y formulando, en función de ello, previsiones de resultados tal como a veces se acostumbra a hacerlo—, entenderíamos muy poco de lo que está ocurriendo en el país. Basta ver la votación que ha obtenido Ollanta Humala y que lo sitúa como el único partido nacional con representación en todos los departamentos (salvo en Madre de Dios, donde se elige un solo congresista), y las amplias mayorías obtenidas en Puno, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, y, en general, en la sierra central y sur, y en Arequipa, así como en la región amazónica, para entender que, junto con una división que corresponde explicar en términos políticos —no renunciamos a realizar esta tarea también—, existe también un profundo corte social.

Si bien existen varias explicaciones para lo ocurrido, este hecho se da, y basta para entenderlo con una simple mirada en el mapa, por una marcada distancia entre las personas y grupos que se ubican en distintos niveles de integración en la política y el mercado, y aquellos que se encuentran marginados de estos sistemas. Puede señalarse que es un rasgo secular de nuestra historia lo que explica todo y nada a la vez. Lo cierto es que en los últimos años existe una extendida preocupación por la calidad de la democracia —expresada no solo por intelectuales y políticos de distintas orientaciones, y recogida

por organismos internacionales—, en la que se ha insistido en el tema de la pobreza, la exclusión social y la desafección por la política. Algunos la expresan por sus preocupaciones de garantizar la gobernabilidad; otros, atendiendo a razones de equidad. En el gobierno de Toledo, era esperable que dicha preocupación se manifestara, porque la inercia del crecimiento económico hacía que la población, que sentía que vivía en democracia, encontrara que había llegado el momento de hacer sentir sus demandas. En las zonas que se encontraban afectadas por la fuerte discriminación señalada, ella coexiste con un malestar difuso, que no encuentra canales institucionales para expresarse, y con ocasionales pero también intransigentes y a veces violentas manifestaciones de protesta.

Este artículo se propone examinar los diferentes estilos populistas de Alan García y Ollanta Humala, y sus respectivas organizaciones; los persistentes problemas de gobernabilidad que vive el país, y el clima de incertidumbre económica, política y social que atraviesa tanto el Perú como el conjunto de la región andina. Acudirán como argumentos para interpretar la situación presente lo que ha ejecutado y dejado pendiente el gobierno de Toledo en sus rasgos fundamentales, la falta de capacidad hegemónica de los distintos grupos conservadores, la decadencia de la izquierda democrática y el probable escenario que se abrirá en los años venideros. Finalmente, se señalarán las dificultades que afronta la afirmación institucional de la democracia.

## **La vigencia del populismo en distintas vertientes**

La segunda vuelta electoral, como ya se ha señalado, fue disputada finalmente por dos candidatos que representan diferentes variantes del populismo: Alan García del APRA, que trató de integrar a grupos relativamente organizados de la sociedad;

y Ollanta Humana de Unión por el Perú, que se dirigió, sobre todo, a sectores que se encontraban excluidos del sistema político y económico. Aquí trataremos de explicar las diferencias entre uno y otro. Con ese fin, me permitiré introducir cuatro párrafos que no son exactamente una digresión sobre el tema y que, al deslizarse un tanto a la filosofía política, el lector puede obviar, si prefiere, para retomar la comparación planteada en términos más sociológicos y políticos.

Como se ha señalado, la operación populista desplaza los elementos antagónicos que se enfrentan al orden establecido, dejando de lado las demandas de organizaciones que pueden afectar incluso a la élite que dirige el movimiento y que consigue, finalmente, establecer un principio de unidad al fetichizar al Estado y mitologizar a un jefe o conductor (De Ípola y Portantiero 1994). Este proceso construye un sujeto, el pueblo, que actúa como referente al definir una identidad política a partir de una diferencia entre «nosotros» y «ellos», que pueden ser la «oligarquía», los «ricos» u otro país.

Un reciente trabajo de Laclau (2005) plantea una aproximación sobre el tema influida por la lingüística, el psicoanálisis y la filosofía, y que no vamos a exponer sino en lo estrictamente indispensable para situarnos en la actual coyuntura del país. Este autor entiende que la lógica política se relaciona con la institución de lo social y que el populismo es una de las estrategias relevantes para establecerla. Retoma la idea de que la lengua es un sistema cerrado en el que se van estableciendo, de manera relacional, distintos significados. Desde su perspectiva, pensar en aquello que es exterior al sistema resulta siendo, en consecuencia, un acto de expulsión de algo que «la totalidad expele por sí misma» y que se constituye para que esa misma totalidad pueda pensarse. Desde este movimiento, todos los otros términos que no tienen esa situación excepcional aparecen como equivalentes. Asume entonces la representación de



algo que es inconmensurable —rechaza la comparación— y que produce un cierre en el sistema. Se sabe que este cierre es precario y hasta cuestionado, pero de otra manera no puede pensarse en identidades y significados que son ineludibles de tomar en cuenta. Estas identidades y significados son inestables, y esta condición, además, no resuelve la tensión entre las diferencias y las equivalencias, que no terminan de articularse.

Pasando al plano político, existen demandas a las que llama democráticas, que bien se satisfacen o bien permanecen aisladas, y que se mueven dentro del sistema y se encuadran en la estricta lógica de las diferencias. Las otras demandas, que denomina populares, no consiguen resolverse, se van asociando unas a otras y se las asume como equivalentes. Estas constituyen una «frontera interna antagonica» entre los grupos que las plantean y que se construyen como el pueblo, y aquellos a quienes se considera como detentadores del poder. Hay entonces, en el discurso, una imagen de algo exterior que se resiste a su institucionalización. Estas reivindicaciones se van articulando de manera contingente y su contenido es vago y fluctuante por el juego político establecido y no por una falla en el conocimiento. Situándonos abruptamente en nuestra realidad, puede entenderse en otro plano, y junto a razones que tienen que ver con oportunidades políticas sujetas a cálculo, que estas características se encuentran presentes en los mensajes aparentemente contradictorios que el APRA envía como señales a distintos grupos, inmerso como está en este juego de equivalencias, así como en las imprecisas apelaciones de Ollanta Humala al nacionalismo.

El planteamiento de Laclau parece contener tres deliberadas limitaciones. Si bien es cierta la idea de una frontera, no se detiene a considerar, como señala Žižek (2006), que se apoya en una pseudoconcreción del enemigo externo. Laclau desplaza, sin cuestionarlos, los antagonismos inherentes a la política

y a la sociedad en favor de otro antagonismo: el pueblo y sus «enemigos externos», que no tienen que ver con los grupos estratégicos que ejercen el poder. Ocurre así una suerte de «transustanciación» de significados flotantes, arbitrarios y contingentes, que escapan a cualquier determinación o, si se quiere, a un principio de explicación e inteligibilidad que contribuya a que la acción política se apoye en una crítica fundada del estado de cosas existente. La otra limitación es que el populismo no es el único modo en que se expresa un exceso de antagonismo. Difícilmente puedan considerarse como populistas, por ejemplo, los movimientos estudiantiles de 1968 o aquellos por los derechos humanos contra la segregación racial en los Estados Unidos, que desbordaron el orden con una demanda particular y no como parte de una cadena. Finalmente, la última es que no parece comprender que la democracia y las demandas democráticas tienen, a su vez, sus propias lógicas de equivalencia y de diferencias, que se relacionan con su carácter agonista (de conflictos como parte de su constitución). Este, como señala Mouffe, se distancia tanto de los extremos de la pura lucha, de la pura confrontación, como del espacio de una competencia que finalmente regula e institucionaliza la ley.

## **El populismo histórico del APRA**

Los frecuentes cambios de orientación en la historia del APRA se apoyan en la idea de que aquel que ejerce el liderazgo de la organización es, además, el más calificado para hacer un discurso reconocido y que sirva de guía. Además, los textos elaborados por Haya de la Torre, primero, y por Alan García, después, obran, dejando de lado la consideración de su pertinencia teórica, como un criterio de legitimación ante sus seguidores. El líder, entonces, permite soldar una cohesión interna

constituida por una subcultura relativamente cerrada que el nuevo ingresante debe tratar de entender en sus enunciaciones expresas y en sus códigos implícitos. Esta unidad coexiste con la idea de que se está proyectando un mensaje para el conjunto de la sociedad, al oponerse a ese «exterior» impuesto al que hicimos referencia y que en la primera vuelta electoral de las elecciones de 2006 fueron «los ricos» y los que pugnaban desordenadamente por el cambio. Aunque se trata de una estrategia política muy pensada, este mensaje es algo más que una simple ubicación en el centro político.

Entendido así el proceso, no hay espacio para una competencia intelectual dentro del partido, y eso libera la líder de interlocutores que puedan situarse a su mismo nivel dentro de su organización. Si bien, al menos durante el primer gobierno de Alan García, la carencia de cuadros preparados afectó severamente su gestión, más allá de las objeciones que puedan hacerse a su política económica, veladamente se le sigue invocando como el caudillo letrado, al que se reserva las palabras definitivas, en una actitud propia de la mayoría de los populismos históricos de América Latina. Basta pensar en el peronismo argentino o en el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, cuando ese partido abandona su impulso orientado al cambio radical pocos años después de 1952 y se estructura alrededor de quien es reconocido expresamente como el jefe que ramifica su autoridad en diferentes comandos (Lavaud 1998). En estas características radica tanto la fortaleza como las dificultades del APRA para seguir una orientación socialdemócrata más convencional y modernizadora. Es como si el partido y Alan García quisieran apartarse de la lógica que hasta el presente siguieron y una fuerza centrípeta les impidiera salir de ella.

Como señalan bien De Ípola y Portantiero (1994) no existen populismos laicos. Hay elementos de fe que apuntan a una

religiosidad popular. Recordemos que en el acto final de su campaña, antes de comenzar su discurso, Alan García se detiene en un calculado gesto asumiendo una actitud de oración que se conjuga luego con la invocación conjunta a la providencia divina y a las persecuciones que tuvieron que afrontar los apristas en su densa historia. Este énfasis se encuentra asociado cercanamente a un catolicismo conservador y hasta preconiliar, y contrasta con la fe invocada por Haya de la Torre, influida por corrientes filosóficas como el espiritualismo y rica en metáforas y alusiones bíblicas.

Otra característica del discurso de Alan García y del APRA como organización, que también comparte rasgos con los populismos históricos latinoamericanos, es la idea de que se ha establecido o se busca establecer un pacto entre obreros, empleados, clases medias y algunos grupos de empresarios. Los campesinos y otros grupos excluidos no forman parte de este acuerdo, y ello se traduce, aun hoy, en dificultades políticas de convocatoria. Este pacto se va redefiniendo en una retórica reivindicación de justicia social, en la que el conductor obra, unas veces, como el encargado de dar los lineamientos y, otras, tan solo como árbitro. Estas características lo apartan del universo relativamente previsible del Estado de Bienestar, por lo menos en su período histórico de mayor vigencia. Se señala con acierto, y en la misma línea, que el liderazgo populista mantiene vigente la exigencia de una cláusula central de contenido político que obliga al conductor a preservar una continuidad del grupo constituido que se coloca bajo su protección, así como la imagen de que se está cuidando por el destino personal de cada uno de sus integrantes (Hermet 2001).

Atendiendo a esta consideración, quizás no sea desatinado presumir que la reivindicación de Alan García en relación con el cumplimiento de la ley de las ocho horas no manifestaba únicamente una preocupación por el raleado número de

trabajadores estables y sus débiles organizaciones sindicales, sino que actuaba como un signo de identidad, al invocar a los propios militantes del APRA. En otras palabras, se trataba de una manera de reconocerse. En el fondo, aludía a una sociedad estructurada en clases sociales con límites relativamente precisos, en la que el partido puede dar una imagen de continuidad de su propia historia frente a los abruptos cambios de los últimos años.

## Los rasgos populistas en Humala

El concepto de pueblo tiene una doble acepción: la de *plebs*, que se refiere a los menos privilegiados; y la de *populus*, que alude al conjunto de los ciudadanos. Esta distinción nos permite comprender las diferencias entre el populismo de Alan García, de antigua raigambre, y el de Ollanta Humala, surgido en un período reciente. El primero, y con él su partido, imagina el *populus* como idea para pensar en una comunidad política, aunque presienta o sepa que en el Perú no existe; el segundo, por su parte, parece conocer a aquellos por quienes dice hablar, la *plebs*. De este modo, Humana se proclama como vocero de los excluidos.

Rancière, cuyas ideas recogemos de Žižek (2001), señala, probablemente con exageración, que el conflicto político ocurre en el campo de una tensión entre un cuerpo social estructurado (los integrados, que en verdad son pocos en nuestra sociedad) y aquellos que no tienen ningún lugar reconocido, identificable, en el orden social jerárquico, es decir, «la parte de ninguna parte» que pugna por hacerse escuchar en ciertos momentos históricos. En este intento, estos últimos realizan un acto político que desestabiliza un orden que se daba por natural y restablecen un principio de universalidad que no termina de completarse si el derecho de los postergados no se

reconoce y escucha. Este modo de hacer política puede tener, como veremos más adelante, elementos propios de democratización como de autoritarismo.

Si bien el autor de estas líneas no está familiarizado con el razonamiento psicoanalítico y duda de su eficacia para explicar los procesos sociales y políticos que se tratan aquí, cree congruente un razonamiento de Laclau que evoca a Freud para entender la posición de Humala. Este en su *Psicología de las masas* habla de una antigua «vanidad narcisista del yo» que se resiste a integrarse al «yo ideal», definido como una suma de identificaciones imaginarias en las que el sujeto es visto por los otros. Desde esta perspectiva, no siempre la imagen de jefe tiene el sentido fuerte que posee en los populismos históricos. En este sentido, Humala es un *primus inter pares*, alguien que tiene rasgos compartidos con sus seguidores, que imaginan haber atravesado experiencias y vivencias similares. Esta condición se asocia a su fortaleza y explicará los probables desesquemas futuros, ya que, puesta la relación en esos términos, Humala es acompañado pero también sometido a prueba. Por esta razón, resulta aventurado sacar conclusiones sobre la suerte de su movimiento. Este podría convertirse en una efectiva oposición, probablemente más social que política, como tornarse irrelevante, quizás desplazado por otros grupos y otros líderes.

Desde conceptos más afines a la sociología y a la ciencia política ocurre, entonces, una representación por identificación. En otro trabajo, Laclau (s. a.) afirma que los grupos marginales necesitan de un discurso que los ayude a afirmar su identidad y negociarla. Ello sucede, generalmente, a través de la presentación de un conjunto de demandas dispersas. Además de esta instancia horizontal, el representante o el líder otorga, a estos grupos, la posibilidad de una articulación simbólica, es decir, los constituye o les da el impulso final para

afirmarlos como sujetos políticos. Saliendo ya de este campo de referencia, interpreto que, de esta manera, el representante o líder reconoce a los otros y es reconocido, y el marco institucional de esta representación no tiene que pasar por la constitución de un partido en los términos tradicionales en los que acostumbramos a definirlo.

Desde otra vertiente de pensamiento, Pitkin (1985), en un libro clásico sobre representación, recoge la idea de Rice acerca de que «los votantes tienden a seleccionar para el desempeño de cargos públicos a hombres de su misma “especie” aun cuando la similitud en especie pueda estar basada en el “identificación” que hace el votante de sí mismo con los atributos intelectuales, económicos y sociales del que ostenta el cargo público». Desde mi perspectiva, esta correspondencia entre el votante y el representante o líder responde tanto a consideraciones basadas en una relación cuidadosamente pensada como al hecho de participar las dos partes en un mismo malestar respecto al orden vigente. Humala parece recoger bien estos dos aspectos entre quienes son sus seguidores.

Como todo populismo emergente, la prédica de Humala imagina un nuevo comienzo, un acto fundacional. La convocatoria a una asamblea constituyente —cuya legalidad resulta cuestionable— respondía, probablemente, a la intención de obtener una base sólida de poder que cambiara la correlación de fuerzas existente, en caso de que obtuviera el triunfo en segunda vuelta sin una mayoría absoluta. Asimismo, obraba como un rechazo no solo a la clase política sino a la propia institucionalidad existente.

En efecto, Humala aspiraba a establecer un poder constituyente, uno que, como ha señalado Negri (1994), se concibe como un acto imperativo de la nación desde un nuevo principio que altera la jerarquía de poderes. De este modo, se buscaba establecer un tiempo político acelerado y de transformaciones;

expansivo y libre en sus determinaciones; resistente, en principio, a la inercia del derecho establecido; y con la fuerza suficiente como para alterar el movimiento histórico que hasta entonces parecía previsible. No es, por cierto, una iniciativa que pertenezca solamente a Humala. Parecidas exigencias han planteado, en estos años, el partido dirigido por Evo Morales en Bolivia y el movimiento indígena en Ecuador.

En el planteo más sociológico y político, Humala corresponde, como ha sido señalado por Panizza (2005) para otros procesos contemporáneo, a una sociedad que redefine radicalmente sus límites, circunstancia en la que tienen decisiva influencia las identidades en transición y en la que se dislocan las demandas particularistas de trabajadores, campesinos, pobladores, desempleados.

Alguna relación tiene que existir entre esta condición y el discurso de Humala, que alude incesantemente a su trayectoria de vida, y en el que son frecuentes sus pausas o interrupciones como si la palabra apropiada tardara en llegar o no se encontrara. No puede menos que notarse el contraste con la fluidez en la oratoria de otros líderes populistas (Alan García, Juan Domingo Perón o Carlos Andrés Pérez, por ejemplo). Lo que no le resta eficacia a su prédica, sino que la hace más adecuada para el objetivo de conseguir que aquellos a quienes dirige su mensaje lo apoyen y logren una identificación en el rechazo a los «políticos tradicionales», en un nacionalismo que no consigue explicarse de modo coherente y en la idea de la fundación de un orden nuevo.

## **La cuestionada gobernabilidad**

El escenario que se presenta en el país en la disputa electoral de 2006 me parece que escapa a los diagnósticos más bien optimistas de economistas, politólogos y sociólogos. Más allá de



las consideraciones que se hacen respecto al hecho de que durante los cinco años de gestión del gobierno de Toledo hubo un crecimiento económico sostenido, el país enfrenta, más agudamente que otros países de América Latina y con rasgos característicos de los países andinos, dos problemas de difícil resolución. Uno de ellos se relaciona con la gobernabilidad política democrática; y el otro, con la percepción de un agotamiento de las propuestas orientadas a la reforma del mercado, por lo menos en el sentido de que ellas pudieran asegurar una redistribución eficaz y un apoyo extendido de la población.

Cuando hablamos de gobernabilidad la entendemos en el sentido de quienes sostienen que se sustenta en cuatro características fundamentales: el fortalecimiento y la capacidad de liderazgo del Estado; la existencia de partidos políticos representativos, que cuentan con adhesiones de distinto grado de intensidad entre los ciudadanos; la autonomía y capacidad de influencia de los actores sociales; y la vigencia y expectativa de fortalecimiento de las instituciones democráticas (Garretón y otros 2003). No es aventurado señalar que poco se ha avanzado a ese respecto, en años cruciales para pasar de la transición a la consolidación de la democracia.

### ***Fortalecimiento y capacidad de liderazgo del Estado***

En lo que se refiere al Estado, además de no haberse emprendido una reforma de su trama institucional en un momento en que existían perspectivas favorables para hacerlo —y que probablemente no se repetirán en los años venideros—, existe una falta de penetración en el conjunto del territorio del país, a diferencia de lo que ocurrió en un gobierno con rasgos autoritarios como el de Fujimori. A pesar de haberse llevado adelante una reforma descentralista (más allá o, quizás, también por la improvisaciones con que se realizó este proceso)

en las sociedades locales, y especialmente en aquellas más alejadas, se hace sentir la ausencia de los sectores del Estado, especialmente de algunos ministerios que están dirigidos a resolver problemas clave de la población, como los de Agricultura, Salud y Educación. Siguen vigentes las críticas a la administración de justicia. No tienen una adecuada cobertura nacional los mecanismos de control del gasto. Se ha desatado, en diversas ocasiones, competencias y enfrentamientos entre presidentes regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. A ello se agrega la ausencia de canales de comunicación e información fluidos. La consecuencia, alentada además por el inevitable y necesario crecimiento de las demandas de grupos postergados en un proceso de cambio democrático, es que se han precipitado situaciones de conflicto que el gobierno ha sido incapaz de resolver, recurriendo, en cambio, a ineficaces mecanismos improvisados.

Pero no solo los organismos mencionados actuaron con ineficacia y, a veces, con desidia, y, en todos los casos, con incompreensión, sino que la Defensoría del Pueblo realizaba un esfuerzo aislado en la defensa de derechos de la ciudadanía y en su intento de darle un marco racional a los conflictos. Este esfuerzo no encontraba respaldo ni resonancia en la red de otras instituciones del gobierno, mientras que otras corporaciones que no tenían que ver directamente con el Estado, como la Iglesia, ejercieron poderes tutelares o arbitraje, en buena medida por reclamos de la población. Evidentemente, este hecho expresaba las falencias de nuestra institucionalidad democrática.

En todo caso, las demandas de los ciudadanos en los territorios más pobres se vinculaban, esta vez, también con reclamos de políticas sociales universalistas y ya no solo con aquellas estrictamente centradas en la atención de situaciones de pobreza y de pobreza extrema. A este proceso se agregaba, como cambio decisivo, el surgimiento de organizaciones que

impugnaban políticas centrales para el Estado, en sus ejes fundamentales de gestión: la minería y las políticas de erradicación de la coca. Asimismo, se debe señalar, en otro plano, la exacerbación de conflictos locales que oponían autoridades contra autoridades o autoridades contra la población o el gobierno central.

### ***Existencia de partidos políticos representativos***

Respecto a la existencia de partidos políticos representativos, lo cierto es que —por lo menos desde 1989 y, desde mi punto de vista, aun antes— no contamos con un sistema de partidos reconocido, aceptado y seguido por la población. Si bien el APRA parece contar con una estructura estable, jerarquías bien establecidas y una red de intermediarios con capacidad de transmitir su orientación y convencer, atendiendo determinadas demandas, a vastos sectores de la población, se trata de una organización que tiene una influencia desigual en el conjunto del país y dificultades —por lo demás históricas— para convencer con su prédica y sus políticas a las poblaciones que viven en la sierra central y sur del país. De hecho, parecen existir, en relación con estas últimas, dificultades para elaborar una política de desarrollo que afronte sus severos problemas de pobreza y que sea viable en el corto plazo. Hay que recordar que estas poblaciones vivieron en las zonas que fueron azotadas por la guerra civil interna que vivió el país, en la que no solo fueron pasivos espectadores, sino también, algunas veces, activos participantes como demuestra el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Más allá del APRA, solo tenemos partidos aluvionales como el que dirigiera Toledo, que contaba, por lo demás, con un apoyo electoral provisorio, es decir, el de aquellos que entendían que era el ocasional líder de la transición democrática y que

iban mucho más allá de los linderos de su precaria organización, sin siquiera tomarla en cuenta. A ello se agrega una derecha que no logra cuajar en una propuesta de alianza estable, ya que, después del fracaso electoral, la coalición Unidad Nacional rápidamente se desperdigó y las tres opciones que lo integraban se separaron: por un lado, el Partido Popular Cristiano, que estaba atravesado, a su vez, por diferencias internas; y, por el otro, Renovación Nacional y Solidaridad Nacional, que nunca llegaron a confiar el uno en el otro.

A su vez, y porque hasta allí llegaban sus fuerzas, la izquierda se ha limitado a participar —muchas veces en segundo plano— en las olas de movilización que atraviesan este período y no consigue, por razones que explicaremos después, generar adhesiones consolidadas. Por otro lado, una posición de centro como la que quiso impulsar Paniagua afrontaba severas dificultades para plasmarse como una opción en un ambiente donde, como hemos visto, había algunos escenarios de polarización social y una marcada distancia entre Lima y las provincias, que alentaba otras iniciativas políticas. La razón de su fracaso fueron, en parte, las carencias que presentaba como candidato y, en parte, el fuego cruzado que se estaba dando desde los extremos del espectro político. Quizás una campaña más atinada hubiera alcanzado mejores resultados, pero lo cierto es que no había partidos con amplia convocatoria siguiendo al postulante.

### ***La autonomía y capacidad de influencia de los actores sociales***

El tercer requisito de la gobernabilidad se relaciona con la vigencia de una sociedad civil con organizaciones sociales consolidadas y con actores autónomos. Incluso antes de que se aplicaran las políticas neoliberales, aunque el proceso se agudizó

con su vigencia, entraron en acelerada decadencia los gremios de obreros, de campesinos y de empleados. Por otro lado, las élites en las sociedades locales se mostraban particularmente débiles y no se creó un grupo de reemplazo ante su ausencia. Este hecho explica, en parte, tanto la volatilidad política existente como la debilidad en lo relativo a presentación de propuestas alternativas. Las políticas de ajuste estructural, al margen de la discusión de si ellas eran inevitables de asumir en determinado período, afectaron redes de seguridad y contacto que hubiesen sido capaces de promover la vigencia de asociaciones más inclusivas y agrupar organizaciones de distinta procedencia. Finalmente, y como veremos más adelante, en los grupos empresariales empieza a cobrar creciente influencia una élite vinculada a sectores de inversionistas extranjeros, que tienen una lectura poco informada del país y que se mueven en un círculo muy reducido de inversionistas y de asesores vinculados a ellos. Dichos grupos, a diferencia de lo que ocurriera con Fujimori, no tienen una mayor resonancia cuando tratan de imponer sus directivas en la sociedad y, ocasionalmente, de persuadir.

### ***La vigencia y expectativa de fortalecimiento de las instituciones democráticas***

En lo que respecta a la consolidación democrática se percibe un rechazo del Poder Judicial, que viene de tiempo atrás. A esto se agrega el desprestigio del Congreso, cuyos integrantes son percibidos no como representantes de la población, sino como grupos de privilegiados que no mantienen vínculos estables con quienes fueran sus electores. Los ciudadanos imaginan y, a veces, saben que los parlamentarios se desentienden de sus problemas y ejercen prácticas prebendarias. Si a ello agregamos la ya mencionada falta de algunos de los antiguos

partidos de integración social, es razonable tanto que surjan movimientos que reclaman orden e inclusión social como que la candidatura de Ollanta Humala tenga vigencia, tema que luego analizaremos con mayor detalle.

## **La incertidumbre económica, política y social**

Junto con este problema de gobernabilidad que tiene que afrontar el gobierno aprista, y en particular Alan García, se está viviendo en el conjunto de América Latina, por razones justificadas o no, una sensación de agotamiento de las políticas económicas que se aplicaron desde fines de los ochenta y, en algunos países, durante la década del noventa e, incluso, en años recientes. Estas se caracterizaban por la defensa de la vigencia de una dirección que privilegiaba el mercado, un presunto sinceramiento de la economía y agresivos programas de privatización. A diferencia de 1985, García no podrá resolver ahora este problema por lo menos en los primeros años, como ocurriera en aquel entonces merced de su avasallante liderazgo personal.

Ante esta crisis del modelo vigente, tampoco es practicable un retorno a una orientación centrada únicamente en el Estado, que promueva nuestros debilitados mercados internos y se base en la sustitución de importaciones y en una economía de signo industrial que gane progresivamente competitividad. Fracados este modelo y el anterior, una creciente corriente de opinión considera que no se consiguen localizar ahora vías definidas con niveles razonables de precisión acerca de lo que puede hacerse, y este dilema y estas dudas las enfrentará tanto Alan García como el conjunto de gobernantes de la región.

Lo cierto es que las relativamente recientes recomendaciones, formalizadas en el llamado Consenso de Washington y relacionadas con la liberalización de las tasas de interés y de

cambio, con los intentos de aumentar la eficacia productiva, con políticas monetarias restringidas y con medidas destinadas a atraer el capital extranjero, que muchas veces tenía carácter especulativo, han llevado a una creciente concentración de riqueza, a una disminución muy poco significativa de los niveles de pobreza y a una generalizada percepción de márgenes de desigualdad que se consideran como intolerables. Ello conduce nuevamente a cambios de orientación en los gobiernos en el conjunto de América Latina y a una situación difícil para el que asumirá en el Perú, aun cuando pueda contar a su favor el aumento de las exportaciones y el crecimiento de las reservas disponibles.

En otro plano, se tiene que definir, según la concepción que se tenga, las distintas tareas que le corresponde cumplir al Estado como regulador y promotor. La renuencia por más de una década a realizar tareas de planificación, más allá de la orientación que se le quiera dar a ella, impide definir un horizonte de cambios basado en un consenso, por lo menos por algunas fuerzas significativas en el largo plazo, y eso supone considerables espacios de improvisación.

El Acuerdo Nacional que impulsara Toledo, más allá de lo bien fundamentado o no de las medidas sugeridas, no parece expresar una idea compartida acerca de la dirección que debe seguir el país, tanto por su escasa vigencia social como por la renuencia de los propios sectores que participaron en estas conversaciones y negociaciones a asumirlo cabalmente. En todo caso, Alan García está obligado a dar señales claras a los sectores conservadores, y tiene que hacerlo al mismo tiempo que, en el conjunto de la región, se están cuestionando las políticas de privatizaciones, sobre todo en relación con los beneficios que supuestamente aportarían al desarrollo económico y a las ventajas que obtendría el conjunto de la población. De hecho, lo que ocurre, más bien, es que estas políticas

provocan resistencias, tanto por el nuevo rentismo y los casos de corrupción que han generado como por la sensación de insatisfacción en relación con el costo de los servicios y sus modalidades de aplicación.

Estamos en un momento político en el cual, como nunca antes, las alternativas son más fáciles de proponer que de aplicar. De hecho, sabemos que se necesita promover políticas de empleo o, en lo inmediato, reducir la pobreza, porque ella está afectando ya no solo la calidad de la democracia sino a la democracia misma; otorgar incentivos ya no solo a la pequeña empresa sino a los campesinos, que se encuentran en condiciones más desventajosas en términos de competencia económica; y, en general, aplicar medidas redistributivas eficaces. Sin embargo, y en el discurso que se preconiza, se trata más de prescripciones acerca de lo que debe hacerse que de un marco de decisiones concreto y tangible de lo que efectivamente se puede aplicar.

La agenda también plantea una compleja discusión, con posiciones que pueden polarizarse, entre quienes promueven la afirmación de bloques regionales y una promoción de algunos niveles de mercado interno para establecer, posteriormente, compromisos mediante tratados de libre comercio, y quienes entienden que estos últimos convenios deben aplicarse de inmediato. Unos y otros entienden que cualquiera de estas opciones tiene costos, y la magnitud de los mismos, que puede variar según las distintas corrientes de opinión, puede motivar enconada resistencia entre quienes se sienten más afectados.

A estas incertidumbres se agrega que, si bien se entiende que en el plano cultural se debe dar una apertura a la diversidad que existe en el país, la sociedad tiende a confinarse en pequeños grupos desconfiados unos de otros, y eso ha aumentado las protestas sociales. Por su parte, los partidos han perdido



sus capacidades de representación; y los movimientos sociales, poco articulados entre sí y sin capacidad o voluntad para articularse, enfrentan dificultades para establecer una negociación política o directamente la rechazan

La gobernabilidad, por un lado, y las difíciles disyuntivas económicas que presenta el momento actual, por el otro, son problemas para los que no basta solamente una política realista y pragmática sino una capacidad de proyectarse con una alternativa. Ambas son las dificultades que el nuevo gobierno tendrá que afrontar en los años venideros, asediado por sectores conservadores desconfiados y por grupos radicales.

## **Los rastros del gobierno de Toledo**

En un trabajo anterior, en el que analizaba la gestión de Alejandro Toledo, señalé que este tuvo que afrontar los legados principales que le dejó el fujimorismo en su orientación y en lo que quedaba de su vigencia social. Quizás es el turno de hacer lo mismo respecto a la futura presidencia de Alan García en relación con las ventajas y los costos que le deja el gobierno saliente.

Grupos vinculados a los empresarios y a los medios, que fueron, en algunos momentos, acres críticos de la conducción de Toledo, concuerdan ahora en señalar que el país ha logrado, en estos años, una estabilidad macroeconómica significativa y un crecimiento sostenido, y que eso debiera llevar al escalón de desarrollo siguiente: no renunciar a esta orientación y, al mismo tiempo, plantearse políticas redistributivas. En buena parte, estos presuntos logros se atribuyen a que el Presidente separó —como ha ocurrido frecuentemente con muchos gobernantes de similar orientación— el plano económico del político, y dejó que las tareas económicas fueran asumidas por expertos externos a su entorno. De este modo, los

que manejaban la economía del país estaban desligados, por decirlo así, de las presiones tanto de la población como del propio partido en el que supuestamente el Presidente ejercía su liderazgo.

Creo reconocer, en la gestión anterior, una relativa apertura a dos tipos distintos de élite, que finalmente definieron niveles considerables de confluencia entre ellas.

Un primer grupo estaba vinculado a los organismos internacionales o a aquellos convencidos de las políticas que estos impulsaban. Este grupo se fue progresivamente distanciando de Fujimori, con un punto de inflexión importante en 1997, cuando el entonces gobernante decide su segunda reelección. En perspectiva, el rechazo de estas élites no era por una discrepancia con los rasgos autoritarios que caracterizaban al régimen, sino por el hecho de que la búsqueda de un nuevo triunfo electoral llevaba, al entonces gobernante, a tomar decisiones que, a criterio de sus técnicos, desordenaban el modelo y lo hacían proclive a medidas populistas desde su punto de vista. Les preocupaba más la inconsecuencia que suponía desarrollar una orientación clientelista en gran escala que el retorno al Estado de derecho, si bien cabe reconocer que progresivamente fueron afirmando lo que hasta ese momento eran sus endebles convicciones democráticas.

Alejandro Toledo mismo, en sus inicios, era un experto de segunda línea dentro de esa orientación. Debe recordarse que, al principio de su campaña, entendía que debía continuar las líneas matrices de la orientación preconizada por Fujimori, y solo el bloqueo que realizara este último gobernante respecto a sus intentos de competir electoralmente en condiciones democráticas lo llevó a buscar un apoyo social que pasaba por enfatizar la defensa del Estado de derecho. Estaba obligado también a hacerlo porque la base de su apoyo la fueron constituyendo tanto grupos comprometidos con la democracia como

lo que quedaba de organizaciones sociales representativas o de personas que habían tenido trayectoria en ellas. El apoyo a Toledo era el recurso del que se disponía como una estrategia válida para recuperar las libertades y garantías perdidas.

El segundo grupo al que recurrirá Toledo estaba conformado, fundamentalmente, por aquellos que fueron protagonistas decisivos, incluso más que los partidos —aislados y, aún más, desprestigiados—, en el impulso hacia la transición democrática. Estas élites procedían de las organizaciones no gubernamentales, de los grupos de derechos humanos y de las instituciones especializadas en vigilancia de procesos electorales, que manejaban con eficacia redes internacionales. Si hasta entonces no habían tenido incidencia social significativa en el país, en esta etapa adquirieron un singular protagonismo.

Estas dos élites, cuyos miembros funcionaban como asesores del gobierno, coexistían con el precario partido de gobierno y, en general, aparecían como más confiables que este. Ello explica tanto los ataques que recibieran de parte de Perú Posible como la propia desconfianza del Presidente, que temía que surgieran, dentro de aquellos a quien él mismo había designado en cargos de responsabilidad, nuevos competidores o que incluso estuviera propiciando indirectamente el surgimiento de partidos políticos emergentes. Este hecho demostraba tanto su desconfianza como su equivocada lectura acerca de los cambios que se estaban gestando en el país.

Alan García tiene que afrontar, también, los problemas que deja pendiente el gobierno de Toledo. En la sociedad, sus notorias dificultades en el manejo de conflictos, tanto en relación con los gremios como con el nuevo carácter que tomarán los movimientos sociales, mucho más dispersos pero también mucho más confrontacionales. Esta incapacidad en la gestión se debe, en alguna medida, a la falta de información acerca de lo que ocurría en el país; a la carencia de cuadros intermedios

en su propio partido, con capacidad de reclutar adherentes y de negociar con sus contendores; a su irrelevancia en los espacios locales, donde se desarrollaban dinámicas difíciles de entender; y a la permanente tensión en su gobierno entre un entorno de asesores que ocupaban posiciones de poder con posturas intransigentes y otros más proclives a la concertación. En todo caso, puede señalarse que la frágil gobernabilidad que deja el gobierno de Toledo se explica, más que por la habilidad de conducción desde el Ejecutivo, por la precariedad en organización y recursos de sus adversarios.

Alan García tendrá que afrontar, además, la emergencia de movimientos con reivindicaciones que trascienden la mera demanda social. En un primer momento, Toledo logró una identificación primaria acudiendo a alusiones étnicas, que en su caso no tenía raíces políticas y culturales profundas, a diferencia de lo que ahora está sucediendo en Bolivia, al margen del juicio que se tenga de la gestión de Evo Morales. Este tipo de comportamiento se hizo sentir también en Ecuador a través del movimiento indígena, en el primer año de la gestión del depuesto gobierno de Lucio Gutiérrez. La tendencia, sobre todo por la vigencia que ha tenido el movimiento de Ollanta Humala y lo que está ocurriendo en la región, es que este discurso étnico alcanzará mayor vigencia y radicalizará sus planteamientos. En esta medida, Alan García tendrá que afrontarlo de un modo creativo y más allá de lo que ha sido la prédica tradicional del APRA sobre el tema.

El nuevo gobierno tiene que afrontar, igualmente, el desprestigio de la clase política, que en alguna medida, pero no exclusivamente, es responsabilidad de un partido que carecía de proyecto y de intermediarios, Perú Posible. Sus improvisados congresistas y funcionarios, que comprendieron rápidamente las escasas probabilidades de ser reelegidos, desarrollaron conductas de corto plazo, con las que buscaban la ventaja

personal o del pequeño grupo que los apoyaba, y trataban de ocupar cargos en el aparato del Estado, a todos los niveles del escalafón. Esta conducta incidió, además, en el funcionamiento de instituciones particularmente sensibles para la población, como las que se relacionan con los programas destinados a políticas sociales hacia los más pobres.

Algunas interpretaciones vigentes en ciencia política, planteado el problema en términos de la evaluación de costos y beneficios, quizás entendieran como inevitable este comportamiento oportunista no solo en los integrantes de Perú Posible sino en el conjunto de los representantes, ya que sus márgenes de maniobra eran muy limitados. Desde otro plano, y en parte también como efecto de arrastre de lo que lograra inculcar Fujimori en la población, estos políticos se percibieron como personas que medraban con sus cargos y a las que se otorgaban privilegios en sueldos y en viajes en detrimento de la atención de los problemas de aquellos que los habían elegido, y todo ello, al margen de la relativa incidencia que pueda tener esta manera de actuar en la evaluación de los indicadores económicos y, en general, en el balance de una gestión.

Alan García debe afrontar, además, las oportunidades perdidas por Alejandro Toledo para emprender una reforma del Estado. Este presidente tenía una oportunidad privilegiada para promover cambios en algunas instituciones estratégicas. En efecto, cuando llega al poder, encuentra a un ejército aislado y desprestigiado; a un poder judicial desacreditado; a una sociedad en la que se había generalizado la idea de que eran inevitables los cambios; y a sectores que, como los mencionadas, eran incapaces, por su situación, de ejercer resistencia para oponerse a los cambios. Sin embargo, cediendo a presiones que existieron pero que eran menos significativas que en períodos anteriores, fue incapaz de imponer una reforma en las fuerzas armadas, en el sector justicia o en el Ministerio

del Interior. Al mismo tiempo, dismantela progresivamente el sistema anticorrupción, proceso en el que el caso suscitado por Almeyda es un punto de inflexión que termina convirtiéndose en un obstáculo para la consolidación democrática. Si bien cabe reconocer que estos aspectos, no parecen suscitar una especial preocupación en el APRA.

Alan García puede asegurar la independencia del Banco Central de Reserva en sus políticas de control y entender que algunos ministerios clave en el desarrollo económico tienen que ser encomendados a personas de fuera de su entorno partidario. Sin embargo, lo expuesto acerca de las disyuntivas en que se encuentra América Latina y el Perú hace imposible que pueda separar lo económico de lo político y entender que lo primero funcione como guiado por un piloto automático que asegure una buena conducción.

### ***Las dificultades de Alan García para formar un equipo de gobierno***

Ante la sensación de agotamiento de las propuestas que predominaron en la región en la década anterior, García probablemente tratará de promover cambios y asegurar estabilidad. Dadas sus características personales, es difícil que se resigne a tener, en estos objetivos, un protagonismo de segunda línea. No obstante, el problema que afronta es la carencia de cuadros intelectuales y técnicos en su propio partido. Este problema parecía que ya lo había advertido desde el inicio mismo de su campaña electoral, cuando lanzó su candidatura y trató de llevar adelante un frente social como señal de apertura económica, política y cultural de su organización. Sin embargo, este intento, ya desde aquel entonces, se mostró fallido.

Además, García afrontará dificultades respecto a contar con la adhesión de los dos grupos de elites que, de una u otra manera,

ayudaron a que la gestión de Toledo pudiera culminar, no sin haber atravesado antes por numerosas dificultades y períodos de aguda incertidumbre.

Por una parte, los grupos tecnocráticos, vinculados a políticas centradas casi exclusivamente en el estilo de reformas orientadas al mercado y la atracción de la inversión extranjera, afrontan el inconveniente de que cuentan con el rechazo de la mayoría de la población y, especialmente, de los grupos más dispuestos a organizarse y protestar. Difícilmente, este conjunto de asesores y probables ministros aceptará una orientación que no sea la suya. Se muestran, sino fundamentalistas, poco flexibles respecto a lo que aparecen como sus incommovibles convicciones.

Por otro lado, las élites promotoras, entre otras fuerzas, del proceso de transición democrática, débiles en su base de sustentación, tienen un serio inconveniente. Si bien pueden ser más proclives a desarrollar orientaciones dirigidas al cambio, se concentran, en muchos casos, en el tema de la vigencia de los derechos humanos, y eso hace que, además de tener presente los problemas que existen en esa área desde el primer gobierno de Alan García, se resistan a tener como vicepresidente al vicealmirante retirado Luis Giampetri, quien tiene una decidida orientación de menosprecio de estos problemas y de rechazo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. De hecho, ha intentado responder a acusaciones fundamentadas de impunidad, entendiéndolo que las violaciones registradas en el período de la guerra no ocurrieron o, por lo menos, son las secuelas inevitables de un conflicto violento.

### ***Alianzas y dilemas***

Alan García dirigirá un gobierno que no dispondrá de ese período de gracia o de tregua social que se otorga con frecuencia

a los presidentes en los primeros meses de su gestión. Por el contrario, tiene que tomar medidas enérgicas que demuestren su voluntad de promover cambios. En esa línea, es probable que delinee políticas y realice gestos de acercamiento respecto a los departamentos más pobres del país, aquellos en los que Ollanta Humala contó con mayor apoyo electoral. En ese intento, Alan García puede ser acosado por dos frentes: por el lado conservador, el conformado por aquellos que lo acusen de retorno a medidas de orientación populista, que suponen despilfarro de recursos; y, por el lado de los movimientos sociales contestatarios, aquellos que consideran que sus demandas no se cumplen y que sus necesidades son impostergables.

¿Con qué aliados cuenta García para desplegar una iniciativa de cambio? Quizás algunos partidos menores como Restauración Nacional o el Frente de Centro. En todo caso, pareciera que lo más aconsejable es definir políticas de alianza tema por tema. Un acuerdo con la derecha lo llevaría a un aislamiento respecto a parte de la población, especialmente en las zonas de la sierra y parte de la región amazónica. Por otro lado, el acercamiento con el movimiento humalista es más que improbable y, además, generaría, en la difícil probabilidad de establecerse, el temor de que se está promoviendo una política que llevará a un desborde social incontrolable. Finalmente, acuerdos parciales con el fujimorismo conduciría a que se sustenten acusaciones, acaso bien fundamentadas, de que se estaría fomentando situaciones de impunidad.

La ubicación de Alan García en el centro político le dio ventajas electorales decisivas, pero, en la situación que está viviendo el país, no necesariamente le conseguirá réditos en el caso de que se trate del cumplimiento de la ejecución de las políticas que se proponga emprender. Además, afronta la impostergable necesidad de que se planteen metas precisas y comprensibles en términos de ingreso, empleo y políticas



sociales. Ello puede permitirle hacer su gobierno previsible y le otorgaría, en este sentido, una línea de acción a sus cuadros intermedios. Asimismo, permitiría, de alguna manera, un seguimiento de la sociedad en relación con que los compromisos contraídos efectivamente se cumplan, y eso puede ser quizás un factor de contención y de estabilidad política.

Esta compleja situación se da en el marco de las próximas elecciones regionales, provinciales y distritales, en noviembre de 2006. Alan García tiene que demostrar la suficiente capacidad de manejo para no dar la imagen de un gobierno asediado, por un lado, por el movimiento humalista; y, por el otro, por Unidad Nacional. Asimismo, necesita conseguir bases de apoyo a nivel local que eviten una posible situación de aislamiento. Quizás, la utilización y distribución de fondos y partidas a través del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), así como la progresiva transferencia de competencias que se encuentra prevista en el proceso de descentralización, le otorguen al Presidente la capacidad de negociar, pero probablemente en un marco de gobiernos locales que responden a distintas orientaciones políticas y exigencias, tanto procedentes de partidos como de movimientos independientes.

### ***La discutida vigencia de Ollanta Humala***

¿Puede considerarse a Ollanta Humala como a un *outsider* en otro plano? Si nos atenemos a una definición rígida, ciertamente tiene la calidad de tal, ya que es un candidato que ingresa por fuera del sistema político establecido. Sin embargo, cabe preguntarse por lo ya expuesto en este artículo ¿de qué sistema político establecido estamos hablando? Más allá de esta primera aproximación, quizás demasiado elemental, lo cierto es que tanto Ollanta Humala como su movimiento han adquirido una visibilidad política en el Perú por lo menos desde

el levantamiento de Locumba en 2000. Esta visibilidad ya se encontraba vigente desde aquel entonces, cualquiera sea la interpretación que se le otorgue a dicho acontecimiento (una maniobra que denota un acercamiento siniestro a Montesinos o, como creen algunos, un episodio de insurrección democrática).

Por otra parte, la constante prédica de su hermano Antauro Humala hizo que la figura de su hermano tuviera un protagonismo sostenido y, a partir de la toma de la comisaría de Andahuaylas y sus consecuencias posteriores, a fines de 2004 y comienzos de 2005, lo hizo, además, relevante en lo que podían concebir vastos sectores de la población como una propuesta política a la que adherirse o rechazar. En todo caso, aun cuando se le reconozca a Ollanta Humala la calidad de *outsider*, hay dos hechos que le otorgan rasgos diferenciales en relación con lo que en su oportunidad fueran, en el Perú, Ricardo Belmont y Alberto Fujimori; o, en Brasil, Fernando Collor de Mello.

En primer lugar, su visibilidad forma parte de episodios que se han repetido en la historia reciente de América Latina. Se trata de levantamientos de oficiales de menor graduación que se oponen a quienes en ese momento están ejerciendo la presidencia, intentando o bien un golpe de Estado o la renuncia del mandatario. Eso ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela y con Lucio Gutiérrez en Ecuador, y ambos constituyeron, posteriormente, movimientos propios que lograron el triunfo electoral.

En segundo lugar, está el hecho de que Ollanta Humala forma parte de una corriente contestataria, ligada a sectores de escasa organización en la población, con rasgos populistas, reivindicaciones contra la clase política nacional y denuncias contra el capital extranjero o, por lo menos, una postura crítica en relación con una supuesta permisividad de anteriores gobiernos con respecto a este. De hecho, sus planteamientos consiguen

tener una resonancia que consiguió el explícito apoyo de su candidatura por parte de Hugo Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia.

La soledad del *outsider*, enfrentado a otros candidatos y solo contando con una vertiginosa adhesión de ciudadanos que no encuentran otra opción disponible más adecuada, no se aplica estrictamente al caso de Ollanta Humala. Su doctrina nacionalista tiene una vaga impronta ideológica, tributaria de ciertos rasgos del pensamiento de izquierda, del populismo y de una doctrina relativamente elaborada acerca de cómo debe constituirse el ejército, en el que existen oficiales y soldados con diferentes niveles educativos y procedencia étnica. Al margen de lo inconsistente que pueda sonar este discurso, consigue darle a su postulación un rasgo característico e innovador respecto a otras opciones que se le presentan al electorado.

### ***La deliberadamente vaga apelación nacionalista***

Resulta una tarea que se pierde en su propio esfuerzo buscar identificar los rasgos precisos que caracterizan el nacionalismo invocado. En todo caso, para quienes se sienten excluidos del sistema político, obra como una afirmación de identidad que se vuelve invasora cuando sucede que las personas o los grupos sociales no consiguen establecer definiciones precisas acerca de su condición en el plano del trabajo, de la educación, de la familia, signadas por los bruscos cambios en sus biografías personales, que no consiguen sitio en otros discursos más integradores como, por ejemplo, el de clase social.

Esta afirmación nacionalista otorga seguridades que en otros espacios le son negadas, por más precarios que resulten los argumentos invocados para un observador que no comparte esos supuestos y bases de sustentación. Este nacionalismo, además, es una manera de concebir una comunidad política

cuando la gente no se siente reconocida como ciudadana, como titulares de derechos y obligaciones.

El avance de la democracia, por más contratiempos que ella haya tenido, ha creado una conciencia en esta dirección y ha exacerbado un sentimiento crítico respecto al orden existente. Es el caso de buena parte de las poblaciones de zonas rurales, de centros poblados alejados o de la periferia de las ciudades, que sienten que se encuentran en una situación de inferioridad relegados a una segunda condición, que denota una subordinación impuesta por el estado de cosas que han establecido unas élites crecientemente cuestionadas.

En efecto, el avance de las nociones de ciudadanía en nuestras sociedades no es una línea de progreso lineal, valga la redundancia, y sostenible, sino que también puede fomentar un sentimiento crítico. Como contrapartida, los que se sienten excluidos pueden excluir a los otros también, por lo que, en las condiciones actuales, la afirmación de un sentimiento de pertenencia tiene también rasgos de negación que Ollanta Humala confusamente interpreta.

### ***Una vasta red de operadores políticos***

Por otro lado, y a diferencia de la mayoría de los *outsiders* que han existido en América Latina, Humala tenía previamente construida una red social de intermediarios prestos a actuar y que fueron capaces de llegar con su mensaje a zonas donde no tenían capacidad de incidir los partidos políticos. Ello ocurrió especialmente con los reservistas, considerados por parte de la población como «hijos del pueblo» como en su tiempo también lo fueron los seguidores de Sendero Luminoso. En este caso, los reservistas fueron reclutados a «la leva», por la violencia, y vivieron una experiencia que cambió en parte sus referentes de vida, sus conocimientos del país,

sus criterios de evaluación y, consecuentemente, sus comportamientos políticos.

Además, este hecho ocurre porque, de manera decisiva, ha incidido la experiencia de haber vivido situaciones extremas y difíciles de tolerar, que van desde la guerra interna hasta el enfrentamiento con Ecuador. Se sienten no reconocidos en su calidad de vencedores en ambos enfrentamientos, ni compensados suficientemente por el sacrificio que entienden han emprendido en causas que, finalmente, beneficiaban a los demás y de las cuales ellos no conseguían ningún reconocimiento ni ventajas tangibles. Además, como señala Ramón Pajuelo, han sido protagonistas de procesos de movilización social restringida. Se prepararon para ser, con frecuencia, carpinteros, choferes, pintores, mecánicos o agentes de seguridad, y se encuentran, otra vez, con dificultades para adaptarse a los ritmos y rutinas de sus lugares de procedencia y en condiciones desventajosas si les toca enfrentar mercados laborales más exigentes y restringidos.

Tienen entonces dos razones para sentirse discriminados. En primer lugar, son campesinos pobres que ahora disponen de nuevos elementos de juicio para entender cual es su situación, comparándola con un horizonte de oportunidades más vasto y a la vez más complejo de abordar. En segundo lugar, han vivido en el ejército y, quizás de manera muy rígida, el ejercicio de lo que es la jerarquía y las diferencias entre personas de distinta condición, marcadas con inusitada fuerza y mal disimuladas en una idea de camaradería de hombres en armas. En todo caso, tienen la capacidad de hablar en sus propios términos con las comunidades y centros poblados de donde proceden y, eventualmente, de hacer valer su posición.

No debemos olvidar que el ejército es una corporación que se ha caracterizado por preconizar un nacionalismo, por lo general, intransigente y no siempre articulado coherentemente

en un discurso integrador, y que para hacerlo ha apelado a recursos pasionales y a una vocación de sacrificio y de heroicidad que, muchas veces, tiene el contenido implícito de que quienes los asumen son distintos a los demás, que existen barreras que los separan de los otros, al haber tomado una opción más comprometida y demandante que aquellos que desempeñan otras ocupaciones. Sentirse postergados les da la sensación de que poseen capacidades que no son utilizadas ni aceptadas, y deseos de incidir en la situación del país introduciendo una perspectiva de cambio.

En la misma línea de razonamiento, y esta vez refiriéndose a los oficiales y no a los reservistas, se ha señalado la presencia de una generación, entre ellas la de Ollanta Humala, que, atravesando las experiencias del conflicto interno, interiorizó los problemas que afectaban a las comunidades locales y desarrollaron vínculos con ellas. Desde esta posición se señala: «En muchos lugares donde los municipios, colegios, postas médicas y oficinas públicas no funcionaron por los estragos de la guerra, la única presencia del Estado eran las bases militares. La única autoridad a la que podía recurrir la población eran éstos oficiales; una autoridad temida pero que al mismo tiempo constituía la única esperanza de orden y protección» (Panfichi 2006). Ello probablemente explique la alta votación obtenida por el candidato nacionalista en zonas de guerra, aun cuando pudiera haber sido partícipe de episodios de violación de los derechos humanos.

Un episodio gravitante en la vida política del país, y poco estudiado aún por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, son las funciones de ordenamiento, gobierno y solución de conflictos que desempeñaron los comandos político-militares, más allá del cumplimiento de tareas de combate y eventualmente de represión; así como la vigencia del discurso

de Sendero Luminoso, sus posturas presuntamente revolucionarias y la imposición de un criterio de orden alternativo al existente.

### ***Un discurso hostil a la diversidad***

Los dirigentes sociales que siguieron al Partido Nacionalista y los seguidores más cercanos y comprometidos tienden a desarrollar un discurso autorrefencial con arbitrarias definiciones de los otros, a quienes les atribuyen su condición de postergación y de olvido, argumentando razones que entienden plenamente justificadas. En este sentido, la frecuencia con que Ollanta Humala habla en tercera persona de sí mismo probablemente no se relacione con un protagonismo mesiánico, sino con un recurso (que no termina de definirse del todo) de asumir la representación de este vasto agrupamiento social.

Ollanta Humala y su movimiento tienen también una relación ambigua con la diversidad. La afirman, por un lado, como uno de los rasgos que caracteriza a nuestra sociedad; pero, por otro, la recogen como un elemento que tiende a exacerbar la polarización social, desconociendo finalmente esa misma diversidad al negarle reconocimiento no solo a quienes se identifican como sus adversarios, particularmente las llamadas clases políticas tradicionales, sino a quienes no acompañan su proyecto político de cambio. Hay que insistir, entonces, en el hecho de que el Partido Nacionalista combina autoritarismo e inclusión, elementos que constituyen rasgos característicos de buena parte de los movimientos sociales que se hicieron sentir entre 2001 y 2006, y que expresan un extendido malestar de la mayoría de la población en las zonas andinas y amazónicas.

En ese sentido, Ollanta Humala apareció como un intérprete adecuado para lo que estaban buscando estos grupos y

no únicamente, como ocurriera en su oportunidad con Fujimori en 1990, como un sustento para un rechazo al *establishment* político y los riesgos que podía eventualmente traer una política económica que percibían como contraria a sus intereses. En todo caso, en el momento de su elección, Ollanta Humala consiguió que buena parte de los ciudadanos que votaron por él sintieran que estaban tomando no una simple opción circunstancial sino una comprometida, a la que proclamaban su adhesión entusiasta, con un elevado nivel de expectativa acerca de las transformaciones que podía traer para el país la nueva organización nacionalista.

El de Ollanta Humala no es un liderazgo consolidado, y no únicamente porque, como es previsible, se registren deserciones de sus improvisados congresistas. Su posibilidad de vigencia se juega en la capacidad de liderar a un desarticulado movimiento social, dándole unidad de propósitos y fortaleza. No se sabe si se propone hacerlo y si está en condiciones de lograrlo. En todo caso, las fuerzas sociales que apoyaron a este grupo seguirán gravitando de modo decisivo, ya sea unidas, recurriendo a diversos caudillos y dirigentes, o desarticuladas e intransigentes.

### ***La falta de voluntad de hegemonía de los grupos conservadores***

Habíamos señalado al comienzo de este trabajo que una de las características más relevantes de la situación política y social peruana es el triunfo de dos populistas, cuyos rasgos diferenciales hemos tratado de caracterizar. Corresponde aludir ahora a la derrota de la derecha y la práctica desaparición de la izquierda política.

La derecha trató, como se ha señalado también, de atender a problemas de inclusión y de redistribución, si bien marcada



—en los términos de sus discursos, en las palabras que enfatizaba, en sus estilos de comunicación— por una distancia difícil de salvar respecto a aquellos votantes, sobre todo de las provincias más alejadas, cuyas adhesiones procuraba conquistar. Por otra parte, había una suerte de retaguardia en su campaña política, caracterizada por la presencia de técnicos que utilizaban un discurso arrogante y desatendían considerar los problemas de pobreza, con una actitud poco abierta al pluralismo y la discusión. Inequívocamente, ellos iban a ser los cuadros que integrarían sus ministerios y los funcionarios de confianza del gobierno de obtener el triunfo.

Un rasgo secular en la historia del Perú se está haciendo sentir con particular fuerza en los últimos años. Este se relaciona con la falta de capacidad hegemónica por parte de elites. Por hegemonía entendemos, como señalaran Antonio Gramsci y Raymond Williams, «un campo dialogístico ambiguamente definido que es compartido por las elites y los subordinados, en el que una dinámica de lucha por el poder, caracterizada por constantes acuerdos y disputas, y por procesos de dominación e insubordinación produce consensos que, por más precario [sic] y sujeto a cuestionamiento, es crucial [sic] en términos políticos» (De la Cadena 2004).

En esta etapa, los grupos de poder se muestran incapaces de generar consensos que sean compartidos por grupos sustantivos de los sectores dominados, cosa que sí logró hacer Fujimori en la década del noventa. Este proceso ocurre, en buena parte, por la falta de intelectuales en las filas conservadoras que conozcan en profundidad la situación del país o les interese emprender esa tarea.

En todo caso, daría la impresión que tienen vagas nociones de un supuesto Perú emergente, que no va más allá de las lecturas de los textos de Hernando de Soto, en sus versiones más elementales: la necesidad de asegurar la titulación y

extender la propiedad; la importancia de la puesta en valor de los activos de los pobres y los perjuicios que causan a la economía los grupos organizados, que imponen privilegios indebidos provocando sobrecostos laborales; los cambios en la ciudad de Lima y en las provincias; y poco más. La interpretación social es un problema desatendido.

Hasta aquí parece llegar el nivel de su discurso acerca del Perú de estos días, y es probable que no se hayan preocupado siquiera de conocer en profundidad las razones de fondo que originaron la violencia política en las décadas del ochenta y el noventa. Sin una base de conocimiento previo de la realidad a la cual se enfrentan, es muy improbable que puedan desarrollar políticas adecuadas para garantizar adhesiones en una competencia electoral, por más provisorias que ellas sean. Curiosamente, también son, como Ollanta Humala, autorreferenciados.

Por otro lado, estos grupos no se han preocupado por realizar a fondo una reforma de Estado. A pesar de que en apariencia están desarrollando sus prácticas en un nuevo contexto político, parte de ellos persisten en su tradicional estilo rentista de acercarse al gobierno, aun cuando utilizan el manto de una ideología presuntamente neoliberal y abierta al mercado.

Finalmente, la CONFIEP ha tenido pronunciamientos de crítica a las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; se ha mostrado indiferente a los temas de derechos humanos y, en otro plano, a los efectos ambientales de algunas de sus industrias y explotaciones; y ha manifestado la necesidad de detener el funcionamiento del sistema anticorrupción, entendiéndolo que había que tratar de superar el pasado, olvidando los hechos, para proyectarse así a un indeterminado futuro con estabilidad y crecimiento económico. Un grupo dominante más lúcido seguramente hubiera tenido un discurso más inclusivo en lo social, más pluralista

en sus prácticas democráticas, más abierto a la discusión de ideas.

Por distintas razones, los medios de comunicación y los periodistas, y esta vez en un plano más coyuntural, han tenido también rasgos elitistas que se expresaban en la pertinaz negación de la competencia racional del adversario: en este caso, tanto Ollanta Humala y sus seguidores como aquellos que tuvieron una posición opuesta a lo que consideraban las prioridades económicas del país y los lineamientos políticos a seguir.

Se creó entonces la paradójica situación de que Ollanta Humala gana por haber sido sobreexpuesto a través de las críticas de estos medios y, a su vez, por retacearle, estos mismos medios, la perspectiva de hacerse escuchar, lo que probablemente, manejado con habilidad, hubiera despojado a Humala de su cultivada imagen de víctima y habría conseguido, quizá, disminuir parte de la convocatoria que consiguiera su candidatura. Al acorralarlo, paradójicamente lo protegieron. En este sentido, desempeñaron un papel fundamental, en la campaña, los rumores y el intercambio de informaciones entre los grupos más pobres, a través de la comunicación personal o del contenido de la programación de algunas emisoras locales.

### ***La desaparición política de la izquierda***

Hemos señalado también que lo que ha mostrado 2006 es la práctica desaparición, en cuanto a un efectivo respaldo electoral, de lo que es la izquierda política democrática. No es propósito de este artículo detallar las razones que explican esta acelerada decadencia. En todo caso, no puede menos que señalarse que los integrantes de estos grupos —como de otras organizaciones de centro izquierda que presentaban su propuesta al electorado—, si bien no abandonaron una tradición

radical de crítica al sistema político, económico y social, y fueron sensibles al tema de las exclusiones, en buena medida la dejaron de lado por asumir temas de menor relevancia para los grupos sociales que anteriormente los apoyaban, como, por ejemplo, los relativos a la participación y a la descentralización.

Desde esta orientación, no pudieron definirse con claridad en relación con los distintos estilos de gobiernos de izquierda que han cobrado una reciente vigencia en América Latina: desde el más confrontacional, representado ahora por los gobiernos de Bolivia y Venezuela, con algunos rasgos que caracterizan la situación ecuatoriana, hasta uno de un discurso más ordenado y orientado también al cambio en Brasil y Uruguay; en menor medida, en Argentina; y, con sus particularidades, en Chile, especialmente con las propuestas que tiene la presidencia de Michelle Bachelet.

No estaban claras las definiciones en este sentido, y a ello se agregaba una notoria falta de renovación generacional que, inadvertidamente para sus dirigentes, los hacía ser vistos como parte de esa clase política tradicional que tan severamente venía siendo cuestionada desde hacía más de una década. Hubo también deserciones en sus filas, de aquellos que formaban parte de sus grupos de élite, que disponían de algunas redes sociales relativamente significativas. Parte de sus técnicos calificados asumieron opciones más moderadas, algunas veces por legítimas convicciones y otras por sentido de oportunidad para afirmar sus carreras personales. Algunas veces también lo hicieron porque entendieron que se encontraban en un escalón superior a lo que fue su etapa de participación en el movimiento social.

En otro plano, existen un conjunto de autoridades, sobre todo en los ámbitos provincial y distrital, que en su trayectoria política tienen un pasado de izquierda, que se ubica a fines de la década del setenta y durante el ochenta, y que abandonaron

sus filas, en parte por el desorden, la división y el fraccionamiento que atravesó lo que entonces era la coalición de Izquierda Unida, situación que le restó credibilidad a todas sus organizaciones y cuyas consecuencias se mantienen hasta el momento presente. En los casos extremos, hubo también quienes pasaron a hacer política en el fujimorismo y sirvieron (sobre todo en las últimas etapas de este régimen) como operadores políticos, tratando de ganar voluntades por medio de la capitalización de su experiencia organizativa.

No debe olvidarse, además, que el discurso humalista, con el énfasis populista ya anotado, tomaba alguna de sus banderas. Por ejemplo, el rechazo al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y una política de nacionalizaciones que ponía determinados límites a la intervención del capital extranjero. El Partido Nacionalista parecía vincularse más de cerca al nuevo clima que se estaba gestando en la zona andina por la influencia de Hugo Chávez, por los nuevos movimientos sociales en la región, por la llegada al poder de Evo Morales y por las continuas insurgencias en el Ecuador.

En todo caso, un eventual gobierno de Ollanta Humala o una oposición dirigida por él planteaba demasiadas interrogantes difíciles de resolver y hasta caminos sin salida en lo que se relaciona con el compromiso de este respecto al mantenimiento del régimen democrático, el respeto a los derechos humanos, el temor de una generalizada extensión de prácticas violentistas e, incluso, la probabilidad de eventuales concesiones a quienes habían sido sus adversarios como ocurriera con Lucio Gutiérrez en Ecuador

### ***La influencia del fujimorismo***

Así como hemos visto que las candidaturas que han obtenido mayor apoyo en los ciudadanos son las de signo populista y

las que han sido derrotadas, las opciones conservadoras y, de modo mucho más severo, la izquierda política democrática, el fujimorismo pudo establecer una suerte de cabecera de playa en el Congreso (y, probablemente, en el futuro, en la sociedad), y eso hace que su vigencia para los años futuros no se encuentre absolutamente descartada.

En perspectiva, Fujimori no había perdido vigencia electoral en las elecciones de 2000, aun cuando en parte dicha vigencia se explique por las presiones previas a los comicios en los medios de comunicación y en los organismos electorales, y por el hostigamiento a los opositores. Lo cierto es que estuvo a punto de obtener un triunfo en primera vuelta sobre la candidatura de Toledo. Aunque era un gobierno corrupto, dicha corrupción consistió, fundamentalmente, en compras irregulares de armamento; en negociaciones irregulares en los procesos de privatización y en las concesiones de explotación; en beneficios indebidos para algunos ministros como Calmet o Boloña; y ya, en los últimos años, en el chantaje y la compra de los medios de comunicación o en el uso de información confidencial privilegiada para obtener ventajas personales, y en la tarea de vigilar y acosar a los adversarios, en un marco de creciente influencia del poder de Vladimiro Montesinos.

Si bien las razones que esgrimen los defensores de Fujimori no son consistentes, lo cierto es que tanto ellos como parte de su electorado han tratado con relativo éxito de marcar distancias entre quien fuera el gobernante de la década de los noventa y su principal asesor, y ello ha convencido a quienes todavía siguen añorando al gobierno anterior. En todo caso, las prácticas irregulares de Toledo, salvo contadas excepciones, se desarrollaron, sobre todo, en un sistema de prebendas y clientelismo en el conjunto de la administración pública, y en algunos contratos con el Estado, y si bien eso estuvo muy

lejos de revestir las características de lo que fue el régimen anterior, resultan particularmente visibles en la experiencia cotidiana de una parte de la población.

Por otro lado, las regiones de la selva y de la sierra centro-sur son aquellas en las que tiene vigencia abrumadoramente Humala y, en menor medida, Fujimori. Esto último quizás se deba a que se asocia a Fujimori, otra vez, con la derrota militar de Sendero, con el reconocimiento que algunos sectores hacen de los comandos político-militares, con un sentimiento de postergación que han experimentado de modo muy agudo en los años recientes y, finalmente, con el relativo éxito de algunos programas sociales.

Debemos recordar que el liderazgo de Fujimori tuvo como uno de sus rasgos característicos una sostenida penetración del Estado, de sus instituciones y de la propia figura presidencial en las zonas más alejadas del país. Sus técnicos, por lo menos en las primeras etapas no necesariamente en todos los casos, fueron operadores políticos del gobierno y se hicieron presentes realizando largos recorridos en localidades alejadas, mientras que Fujimori, por su parte, visitaba lugares a donde antes no había concurrido ningún presidente. Además, había una congruencia entre lo que se ofrecía (una pequeña obra de irrigación, proyectos de infraestructura y saneamiento) y su cumplimiento posterior. Daba entonces una sensación de coherencia y responsabilidad, aun cuando las medidas tomadas no cambiaran sustantivamente la situación de los pobladores.

Debe señalarse que, al margen de que probablemente la asignación de fondos a provincias y distritos iba en dirección contraria a una adecuada gestión descentralista, con el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) los distritos dispusieron de mayores recursos que los que tenían en anteriores gobiernos, y eso produjo cambios que parte de la población

reconoce en las sociedades locales, especialmente en los barrios populares y en los centros poblados y comunidades. Finalmente, a diferencia de otros grupos políticos (notoriamente, los casos de Unidad Nacional y de Unión por el Perú-Partido Nacionalista Peruano), los fujimoristas cuentan con una bancada coherente, en la que es muy improbable que ocurran procesos de transfugismo.

### ***Las incertidumbres de la presente situación***

Las perspectivas que se avizoran dan la impresión de que lo que caracterizará el período, por lo menos en sus primeras etapas, será la disputa entre lo que puede ser una agresiva iniciativa política por parte de Alan García, propia de su estilo de conducción, y la capacidad de Ollanta Humala de constituirse en un líder que conduzca la oposición política. En esta línea, resulta aventurado formular previsiones.

No llama la atención que en el caso de Ollanta Humala, a pocos meses de constituir su movimiento, ya se hagan sentir procesos de transfugismo o de deserción de sus filas. Ello se debe, por un lado, al reclutamiento improvisado de su personal político y, por el otro, a la inestable alianza entre el Partido Nacionalista y Unión por el Perú, que Humala utilizara para obtener su habilitación legal. Por ello, sus perspectivas tienen relación, en buena parte, con la afirmación de su liderazgo personal en esta etapa y con direcciones que sean claras e inequívocas para ajustarse a la voluntad y a las demandas del electorado que lo siguió y que reclama, a su vez, orden y cambio.

En este sentido, las elecciones municipales de noviembre de 2006 constituyen un desafío en que se juega, en parte, la suerte de este líder que, a pesar del respaldo obtenido, se encuentra lejos de haberse afirmado en su condición de tal.



Debe demostrar que es capaz de definir candidatos a los comicios municipales que, a la vez que sean de su confianza personal, tengan lazos con las regiones, provincias y distritos, y le permitan repetir, aunque sea parcialmente, los éxitos obtenidos en las elecciones de la primera y la segunda vuelta electoral de 2006.

Todo indica que durante el próximo período existirán conflictos en los ámbitos de la producción de minerales y del cultivo de coca, y exacerbadas disputas locales. Hasta ahora, estos espacios se han caracterizado por su afianzamiento territorial, su dispersión y su incapacidad de comunicarse unos con otros, y, en ellos, no se ha conseguido articular un movimiento de impugnación que trascienda lo que ocurre en determinadas coyunturas críticas. No se puede responder ahora si Ollanta Humala podrá aglutinar —bajo su intervención directa y una red de intermediarios— a la mayoría de los grupos sociales de estos espacios, proclives a reivindicaciones —maximalistas en su contenido pero de corta duración en el tiempo— e incapaces de crear un escenario social alternativo.

Cabe dudar, sin embargo, de la capacidad de endose con que Humala pueda beneficiar a los eventuales dirigentes que apoye. Salvo en el caso del APRA —y, en mucha menor medida, en el del fujimorismo y en el de Unidad Nacional—, la historia reciente del país demuestra que estas posibilidades de delegación son escasas en un cuadro de dispersión social, en el que se tiende a personalizar opciones. Probablemente, Ollanta Humala enfrente problemas que no esté en condiciones de resolver y se moverá entre la polarización y la irrelevancia, entre una perspectiva de vigencia que lo lleve a dirigir una vasta oposición en el Congreso, en las calles, en las comunidades, y un progresivo debilitamiento y desaparición política.

En una primera aproximación, Alan García se muestra con una mayor capacidad de entender lo que está ocurriendo en el país, así como las características de los movimientos de protesta y las razones que explican la desconfianza y la desafección ciudadana. En todo caso, las políticas redistributivas que puede tomar, así como aquellas tendientes a una integración al mercado internacional o a un relativo fortalecimiento del mercado interno, pueden ser resistidas por diversas orientaciones políticas y diferentes actores sociales. Por ello, puede anticiparse, probablemente, el continuo sucederse de episodios de consensos precarios que coexisten con eventuales protestas que desemboquen en represiones o enfrentamientos.

Contamos con una endeble democracia y con una extendida desconfianza de los ciudadanos respecto a sus instituciones. Esta percepción se relaciona con fallas en el sistema, que han ido apareciendo una y otra vez en esta descripción. Quizás pueda pensarse todavía en una laboriosa construcción del Estado de derecho como tarea que debe proseguirse para superar los obstáculos encontrados. En el proceso, se encontrará una sociedad discriminadora en lo social y racial, que se mostrará, una vez más, en la coyuntura electoral de 2006. En estas condiciones siguen puestas en cuestión las bases para construir una comunidad política y un espacio público democrático.

## **Bibliografía**

LA CADENA, Marisol de  
2004 *Indígenas mestizos. Raza y cultura en el Cusco*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CONTRERAS, Carlos y Marcos CUETO

2000 *Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas por la Independencia hasta el presente*. Lima. Red para las Ciencias Sociales en el Perú.

GARRETÓN, Manuel Antonio; Marcelo CAVAROZZI; Peter CLEAVES; Gaty GEREFFI; y Jonathan HARTLYN

2003 *América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz sociopolítica*. Santiago de Chile: Lom.

HERMET, Guy

2001 «Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos». En Guy Hermet, Soledad Loeza y Jean François Proud'homme (eds.). *Del populismo antiguo al populismo de los modernos*. México, D. F.: El Colegio de México.

IPOLA, Emilio de y Juan Carlos PORTANTIERO

1994 «Lo nacional popular y los populismos realmente existentes». En Carlos Vilas (comp.). *La democratización fundamental*. México, D. F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

LACLAU, Ernesto

2005 *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. S. a. *Democracia, pueblo y representación*. S. I.

LAVAUD, Jean Pierre

1998 *El embrollo boliviano. Turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982*. La Paz: IFEA-CESU-HISBOL.

NEGRI, Antonio

1994 *El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas a la modernidad*. Madrid: Libertarias/Prodhufo.

PANFICHI, Aldo

2006 «El comandante Ollanta Humala ¿outsider o insider?». *Coyuntura*, Lima, CISEPA, marzo-abril.

PANIZZA, Francisco

2005 «Introduction» a su edición *Populism and The Mirror of Democracy*. Londres: Verso.

PITKIN, Hanna

1985 *El concepto de representación*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

ŽIŽEK, Slavoj

2006 «Against The Populist Temptation». *Critical Inquiry*, Universidad de Chicago.

2001 *El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política*. Buenos Aires: Paidós.